

Pereira Risaralda, 08 de octubre de 2024

M.P. Dr. Edder Jimmy Sánchez Calambás  
Sala Civil-Familia  
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira

Referencia: Acción de tutela. Expediente 66001221300020240025800

**Asunto:** Sancionar el desinterés o negligencia de la jueza y Allianz Seguros S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Al señor magistrado de manera respetuosa, le solicito sancionar el desinterés o negligencia de la jueza y Allianz Seguros S.A., y tener como ciertos los hechos expuestos en el libelo gestor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. La jueza y Allianz Seguros S.A., en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción, guardaron absoluto silencio a los hechos contenidos en la solicitud de tutela.

**Presunción de veracidad. Reiteración de jurisprudencia  
Corte Constitucional.**

*(...) El artículo 20 del Decreto-ley 2591 de 1991, por medio del cual se reglamentó la acción de tutela, consagró la presunción de veracidad como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien se ha interpuesto la solicitud de amparo, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones (Art. 19 ídem) y éstas autoridades no las rinden dentro del plazo respectivo, logrando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso.*

*La consecuencia jurídica de esa omisión no es otra que el de tenerse por ciertos los hechos contenidos en la solicitud de tutela, de forma tal que el funcionario judicial debe proceder a resolver de plano, salvo cuando estime necesaria otra averiguación previa, caso en el cual decretará y practicará las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de fondo puesto que como ya lo ha expresado esta Corte, no puede el juez de tutela precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante sino que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante la adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente de la situación fáctica y jurídica sobre la cual habrá de pronunciarse.*

***Si bien es cierto, es principio general aplicable a todos los procesos y por ende al trámite de la acción de tutela, que quien afirma algo debe probarlo y por ello los hechos aseverados por el accionante deben hallarse acreditados, al menos sumariamente, o poderse establecer con certidumbre en el curso del proceso, también lo es, que el auto mediante el cual el juez constitucional ordena a una persona rendir alguna información debe ser acatada en los términos y condiciones solicitadas, so pena de aplicarse la presunción de veracidad.***

*No encuentra la Corte acertada la decisión del a-quo, quien omitió aplicar la regla contenida en el artículo 20 del Decreto-ley 2591 de 1991 o en su defecto haber decretado las pruebas que hubiera considerado pertinentes, por cuanto la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y la especial función de la justicia constitucional, exigen que el juez de tutela practique las pruebas necesarias para llegar al convencimiento de la situación litigiosa aún si los implicados no las solicitan y ello para que el fallo de tutela no se convierta en un acto arbitrario.(...)*

En auto proveído por su despacho el 26 de septiembre de 2024 donde se admite la acción constitucional se anotó.

*“...3. Córraseles traslado por el termino de (2) días, para que ejerzan sus derechos de defensa y contradicción, y alleguen la documentación que estimen pertinente para la resolución del asunto.”*

La jueza y Allianz Seguros S.A., en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción, guardaron un elocuente silencio a los hechos contenidos en la solicitud de tutela.

La jueza, no le allegó documentación de los pagos, para defender su afirmación, ***“..la obligación derivada de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en Agosto 12 de 1998 fue cumplida a cabalidad por la entonces demandada ASEGURADORA COLSEGUROS S.A..”***.

No hay prueba de pago, la afirmación de la jueza, es un acto “espurio”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho: ***“Sí bien es cierto, es principio general aplicable a todos los procesos y por ende al trámite de la acción de tutela, que quien afirma algo debe probarlo “***

Allí la jueza viene afirmando un pago, sin prueba, para no permitir imprimirle el trámite a la liquidación de los intereses moratorios ordenados en sentencia emitida en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia el 12 de agosto de 1998.

Tenemos en el proceso ordinario que se inició en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira que, no se ha podido concretar la suma que debe pagar la Aseguradora demanda a satisfacción del demandante José Orlando Henao Echeverry, después de haber soportado la carga de un largo proceso ganado en justa lid en la Corte Suprema de Justicia.

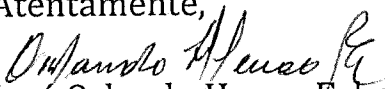
La secretaria del juzgado envía el LINK del expediente con más de 5.000 folios, poniéndole un trabajo imposible al magistrado de investigar los hechos contenidos en la solicitud de tutela.

Ha quedado al descubierto un acto “espurio” de la jueza, donde hizo incurrir en error al Superior jerárquico que, le creyó a la jueza la afirmación, “**..la obligación derivada de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en Agosto 12 de 1998 fue cumplida a cabalidad por la entonces demandada ASEGURADORA COLSEGUROS S.A..**”.

Tengo el deber moral, de aclarar la situación del magistrado Edder Jimmy Sánchez Calambás, porque fue engañado en su buena fe.

Del señor Magistrado,

Atentamente,

  
José Orlando Henao Echeverry